

CONDICION VEINTIDOS
DE LA SUBASTA

Por la inserción de edictos y anuncios oficiales que sean de pago, se satisfará por cada línea 25 céntimos de peseta, haciéndose la inserción precisamente en el tipo de letra que señala la condición 19.



PRECIO DE SUSCRIPCION

	Pesetas
Un año dentro y fuera de la capital.	10
Un semestre id. id.	6
Un trimestre id. id.	4
Números sueltos.	0'25
Se publica todos los dias excepto los domingos.	

BOLETIN OFICIAL

DE LA PROVINCIA DE ORENSE

ADVERTENCIA.—Las leyes obligarán en la Península, islas adyacentes, Canarias y territorios de Africa sujetos á la legislación peninsular, á los veinte dias de su promulgación, si en ellas no se dispusiere otra cosa. Se entiende hecha la promulgación el dia en que termine la inserción de la ley en la *Gaceta*. (Artículo 1.º del Código civil.

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA
DEL CONSEJO DE MINISTROS

SS. MM. el Rey, la Reina Regente (q. D. g.) y Augusta Real Familia continúan en San Sebastián sin novedad en su importante salud.

GOBIERNO DE PROVINCIA

SECCION DE FOMENTO

Expropiaciones

A los efectos del art. 17 de la Ley de expropiacion forzosa, se publica á continuacion la relacion nominal rectificada por el Sr. Alcalde de Lóvios de los propietarios de las fincas que es necesario ocupar en todo ó en parte, con las obras del trozo 7.º de la 2.ª Seccion de la carretera de tercer orden de Orense á Portugal, á fin de que las personas ó corporaciones interesadas puedan exponer dentro del plazo de quince dias, contra la necesidad de la ocupacion que se intenta.

Lo que se publica en este periódico oficial, para conocimiento de los interesados.

Orense 18 de Agosto de 1892.

El Gobernador,

MARCIAL CARBALLIDO BUGALLAL.

AYUNTAMIENTO DE LOVIOS

Relacion que remite el Alcalde de Lovios rectificando la formada por el Sr. Ingeniero de Obras públicas de, los propietarios de las fincas que es necesario ocupar en todo ó en parte, con las obras del trozo 7.º de la 2.ª Seccion de la carretera de tercer orden de Orense á Portugal.

Número de la finca	Nombre del propietario	Vecindad del propietario	Situación de la finca	Clase de la finca	Nombre del colono ó arrendatario de la finca	Vecindad del colono ó arrendatario de la finca
2	Comunal de los vecinos de Grou.	Grou	Grou	Monte		
3	Manuel Araujo	Valoiro	Paizis	Idem		
11	Comunal de los vecinos del Valoiro.	Idem	Valoiro	Idem		
12	Idem, idem.	Idem	Idem	Idem		
13	Manuel Araujo.	Idem	Picouro	Era de majar		
20	Benito Gonzalez Alvarez	Idem	Sonto de Mouro	Monte		
27	José Benito Fernandez	Idem	Idem	Robleda		
29	Benito Gonzalez Fernandez	Idem	Filgueira	Idem		
31	Idem, idem, idem.	Idem	Idem	Idem		
33	Idem, idem, idem.	Idem	Idem	Monte		
35	José Paz.	Idem	Fuseiro	Robleda		
36	Benito Sarrapio.	Idem	Idem	Idem		
37	José Paz.	Idem	Idem	Idem		
39	Maria Josefa Sarrapio.	Idem	Idem	Monte		
41	Benito Gonzalez Alvarez	Idem	Idem	Idem		
65	Agustin Canton	Idem	Cerdedo	Viñedo		
66	Benito Gonzalez Alvarez	Idem	Corga	Idem		
73	Maria Josefa Sarrapio	Idem	Idem	Labradrio		
81	Manuel Alonso Rodriguez	Idem	Idem	Monte		
87	Martina Rodriguez	Herdadifia	Herdadifia	Idem		
93	José Alvarez (herederos) y Manuela Sandias.	Grou	Idem	Prado y parral		
95	Genaro Rodriguez	Herdadifia	Idem			
96	Constantina Canton	Lama	Idem	Prado		
107	Benito Alvarez	Idem	Idem	Idem		
110	Juan Alvarez	Cruz	Idem	Monte		
111	Diego Gandara	Ayt.º Entrimo	Idem	Idem	Manuela Sandias	Herdadifia
112	Comunal de los vecinos de Valoiro y Herdadifia.	Herdadifia	Idem	Lab.º y monte		
		Id. y Valoiro	Idem	Monte		

Visto el informe emitido por el Ingeniero representante de la Administracion en las obras de la carretera de tercer orden de Orense á Portugal, trozo 7.º de la 2.ª Seccion.

Considerando: que no es necesario ocupar las dieciseis fincas señaladas con los números 4, 21, 69, 70, 71, 82, 83 y 86 á 94, en la relacion suscrita por el Alcalde de Lovios en 27 de Septiembre de 1886, publicada en el *Boletin*

oficial de esta provincia núm. 82 del año citado. He acordado dejar sin efecto la declaracion de la necesidad de ocupar aquellas dieciseis fincas, hecha en 15 de Enero de 1887.

Lo que se publica en este periódico oficial para conocimiento de los interesados á fin de que sean notificados por el Alcalde de Lóvios para los efectos oportunos.

Orense 18 de Agosto de 1892.

El Gobernador,

MARCIAL CARBALLIDO BUGALLAL.

Don Julio César Patiño, Licenciado en ambos Derechos y Jefe en comision de Fomento en esta provincia.

Hago saber: que por providencia de 16 de Julio último se ha servido el Sr. Gobernador admitir, sin perjuicio de tercero y salvo mejor derecho, una instancia de la Marquesa de Villalegre, solicitando el registro de veintiocho pertenencias de estaño con el nombre de Doña Blanca, en Pico blanco, términos de

Magros, Ayuntamiento de Beariz, con la designacion siguiente:

Tendremos por punto de partida el centro de la boca de una galería situada al lado Oeste del citado Pico blanco, desde allí medidos doscientos metros á Sur se coloca primera estaca; de ésta á Este setecientos metros; segunda estaca; de ésta á Norte cuatrocientos metros; tercera estaca; de ésta á Oeste setecientos metros; cuarta estaca, y de ésta al punto de partida doscientos metros, dejando cerrado el perimetro que comprende el terreno solicitado.

Lo que se hace público en virtud de lo dispuesto en el art. 23 de la vigente Ley de minas y más disposiciones.

Orense 17 de Agosto de 1892.
—El Jefe de Fomento, Julio C. Patiño.

HOSPITAL PROVINCIAL

Estado que se publica en virtud de la circular del Sr. Gobernador inserta en el *Boletín* de 6 de Junio de 1892, y la cual deben tener muy presente los señores Alcaldes y Secretarios, para evitar responsabilidades.

ESTABLECIMIENTOS DE BENEFICENCIA DE ORENSE	
AÑO ECONOMICO DE 1892-93	
Mes de Agosto	
Estado demostrativo de los enfermos civiles de caridad existentes en el Hospital en el día de la fecha, con expresion del número de vacantes que existen, por virtud de lo acordado por la Comision provincial en sesion de 15 de Marzo último.	
Número de camas disponibles, según el acuerdo	74
Idem de enfermos de caridad hasta el día	72
Vacantes que existen	2

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

EXPOSICION

Señora: La ley de Presupuestos generales del Estado, sancionada por V. M. en 30 de Junio último, dispone en su art. 30 la reorganizacion de todos los servicios públicos, simplificando los procedimientos administrativos y fijando las plantillas de todas las dependencias civiles para llegar á obtener una economía que no baje del 10 por 100 de la totalidad de los créditos concedidos en el presupuesto de 1890 á 91.

A cumplimentar este precepto va encaminado el adjunto proyecto de decreto, en el que, no solo aparece hecha la reduccion del 10 por 100 en el total presupuesto de la Subsecretaría de esta Presidencia, sino que se eleva

al 20, habiéndose, por tanto, realizado un exceso de reduccion de 10 por 100 sobre el tipo mínimo exigido por la ley.

En todo lo que afecta al expresado Centro se ha procurado, en primer término, dejar atendidos debidamente los servicios de índole tan diversa como transcendental é importante á ella encomendados; pero inspirándose al reorganizarlos en el espíritu de economía que informa la citada ley, no se ha podido menos de llegar, sin embargo, á la supresion de una dependencia que ha respondido siempre cumplidamente á los fines para que fué creada, como es la Seccion de Política, encomendada á un Jefe superior de Administracion, cuyos asuntos pasan hoy á depender exclusivamente de la Subsecretaría, así como el personal adscrito á la misma.

No ha bastado la supresion de este organismo para llegar á alcanzar la cifra que se habia propuesto, introducir el que suscribe en el departamento de su cargo, y por lo mismo le ha sido forzoso realizar un supremo esfuerzo á fin de obtener la economía necesaria en el personal de la Subsecretaría, reduciendo al efecto el número de sus plazas y limitándolas á las puramente indispensables para atender á la buena y ordenada marcha de los asuntos. De igual modo se ha procedido en lo que respecta al material de la Presidencia, el cual aparece tan considerablemente mermado, que solo habrá de alcanzar á cubrirlos gastos absolutamente necesarios y perentorios. Con todo esto cabe asegurar que, sin perder de vista el objeto principal de las expresadas reformas, habrán quedado suficientemente atendidas en el departamento de mi cargo las necesidades del servicio público.

Por virtud de lo expuesto, y de acuerdo con el Consejo de Ministros, tengo la honra de someter á la superior aprobacion de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 23 de Julio de 1892.—Señora: A L. R. P. de V. M., Antonio Cánovas del Castillo.

REAL DECRETO

Para dar cumplimiento á lo dispuesto en el art. 30 de la ley de Presupuestos de 30 de Junio próximo pasado; de acuerdo con Mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.º Queda suprimida la Seccion de Política de la Presidencia del Consejo de Ministros, pasando á depender exclusivamente de la Subsecretaría de la misma los asuntos que áquella estaban encomendados.

Art. 2.º La planta del personal de la Presidencia del Consejo de Ministros quedará en lo sucesivo constituida en la forma que se expresa por separado, y los gastos de material y otros de la misma serán tambien reducidos y como igualmente se detallan.

Dado en San Sebastian á veintinueve de Julio de mil ochocientos noventa y dos.—Maria Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

PLANTA DEL PERSONAL Y GASTOS DE MATERIAL DE LA PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS, APROBADA POR REAL DECRETO DE ESTA FECHA.

Presidencia.—Capítulo primero.—Personal

Sueldo del Ministro, abonable solo en el caso de que el Presidente no ocupe otro departamento ministerial 30.000

Gastos de representacion del Presidente	15.000
	45.000
Artículo 2.º	
1 Subsecretario, Jefe superior de Administracion	12.500
1 Oficial mayor, Jefe de Administracion de primera clase	10.000
1 Jefe de Negociado de tercera clase	4.000
1 Oficial de Administracion de primera clase	3.500
2 Idem id. de segunda idem, á 3.000 pesetas	6.000
2 Idem id. de tercera idem, á 2.500	5.000
1 Idem id. de cuarta idem	2.000
2 Idem id. de quinta idem á 1.500	3.000
2 Escribientes Aspirantes de segunda clase, á 1.000	2.000
1 Portero mayor primero	3.000
1 Idem id. segundo	2.500
2 Idem primeros, á 2.000	4.000
2 Idem segundos, á 1.500	3.000
	60.500
	105.500

Capítulo II.—Material.—Artículo 1.º

Asignacion para gastos generales de la Subsecretaría de la Presidencia del Consejo de Ministros 50.000

Artículo 2.º Para los gastos que ha de ocasionar la renovacion y compostura del mobiliario, alumbrado, alfombrado y combustible 14.500

Capítulo III.—Gastos diversos.—Artículo único

Para la reparacion y conservacion del edificio del Palacio de la Presidencia del Consejo de Ministros 5.000

Madrid 29 de Julio de 1892.—Cánovas.

(G. núm. 213)

REALES DECRETOS

En el expediente y autos de competencia promovida entre el Gobernador civil de la provincia de Zaragoza y la Audiencia de dicha capital, de los cuales resulta:

Que á nombre de D. Eduardo Naval se presentó en el Juzgado de Belchite un interdicto de retener y recobrar la posesion del derecho de dos riegos extraordinarios, uno en el mes de Junio y otro en el de Julio de cada año, en el día que designe el poseedor de una finca rústica, sita en el término de Belchite y su partido, el molino bajo denominado Huerta de las Monjas: el interdicto se fundaba en que D. Eduardo Naval es dueño y poseedor de la referida finca, que es de las llamadas huertas de forrajes; y que además de los riegos que á esa clase de finca corresponde todos los años de la acequia del pueblo, tiene los dos riegos extraordinarios, cuya posesion era objeto del interdicto; que al actor en el mismo le habia sido concedido el riego para su finca en el mes de Junio, pero no en el de Julio, si bien se le habia concedido en Agosto; que Don Eduardo Naval habia sido despojado del derecho del riego en el mes de Julio, en cuanto al tiempo y del derecho de designacion del día en que debe darse dicho riego, puesto que no se le concedia sino en el mes de Agosto, y manifestándole que no se reconociera en lo sucesivo el derecho á los referidos riegos mientras su derecho no apareciera cumplidamente probado con documentos bastantes para ello:

el interdicto se dirigía contra el Alcalde y Ayuntamiento de Belchite, cuyos acuerdos habian privado á Don Eduardo Naval del derecho de que se creía asistido: á la demanda se acompañaban, entre otros documentos, una certification del Registro de la propiedad de Belchite haciéndose constar la inscripcion de la informacion posesoria del derecho de que viene disfrutando desde tiempo inmemorial la finca de que se trata de dos riegos extraordinarios, uno en Junio y otro en Julio de cada año en el día que designe el dueño de la finca, posesion que se inscribió á favor de D. Eduardo Naval, y Doña Pascuala Garcés, y una comunicacion dirigida á D. Eduardo Naval por el Alcalde de Belchite participándole que el Ayuntamiento habia acordado que no siendo suficientes los documentos presentados para justificar el derecho que pretende, no se le reconociera en lo sucesivo, á menos que dicho derecho apareciera cumplidamente probado con documentos bastantes; y que tambien habia acordado la Corporacion que el riego que en Agosto habia sido concedido á Naval no sirviera de precedente, apercibiéndole al interesado con qué le pararía el perjuicio que hubiera lugar, si antes de llegar la época de usar de su supuesto derecho no lo justificaba debidamente:

Que el Juzgado declaró haber lugar al interdicto, é interpuesta apelacion á nombre de D. Antonio Valero y García, Concejal del Ayuntamiento de Belchite, se admitió dicho recurso; y en tal estado, el Alcalde de Belchite acudió al Gobernador de la provincia en solicitud de que requiriese de inhibicion al Juzgado, acompañando á la instancia copias de los siguientes documentos: de un oficio dirigido en 30 de Julio de 1891 á Don Eduardo Naval por el Alcalde de Belchite manifestándole que siendo el Ayuntamiento y no el Alcalde el encargado del régimen y administracion de las aguas de riego, habia dispuesto dicho Alcalde que se diera cuenta á la Corporacion municipal de una instancia producida por D. Eduardo Naval, participándole á éste por si le convenia presentar documentos justificativos del derecho que pretende á los dos riegos extraordinarios, para lo cual no habia antecedentes en la Alcaldía para saber si habian de ser utilizadas precisamente en los meses de Junio y Julio de cada año; del recibo expedido por el Secretario del Ayuntamiento; de un escrito presentado por D. Eduardo Naval el día 31 del referido mes manifestando creerse relevado de la presentacion de los justificantes que acrediten el derecho al riego de gracia que le corresponde utilizar en dicho mes para su finca, por suponer que habiéndose concedido hasta la fecha, deben estar en el archivo municipal, porque le habian sido reclamados en otra ocasion; de un oficio de 3 de Agosto participando á D. Eduardo Naval que el Ayuntamiento habia acordado concederle por unanimidad el riego que solicitaba previa justificacion del derecho que alegaba, por no existir antecedentes; y el oficio y la certification del Registro de la propiedad, de que ya se ha hecho mérito, al indicar los documentos presentados con la demanda referente aquél al acuerdo de 8 de Agosto del año pasado.

Que á instancia de la Comision provincial el Gobernador reclamó al Alcalde de Belchite ciertos datos referentes al régimen y administracion de las aguas de la acequia principal de dicho pueblo, y el Alcalde manifestó que entre las varias alternativas por que ha pasado el régimen y administracion de las aguas de riego de uso común para los pueblos de Almo-

nacid y Belchite, se encuentra la anulacion de las Ordenanzas por que pretendia registrarse este último pueblo en el expresado uso y servicio, anulacion que data de 8 de Marzo de 1877, por acuerdo de la Direccion general de Obras públicas, y como el Sindicato creyó que no podia continuar dirigiendo el riego, en vista de la anulacion referida, transirió sus funciones al Ayuntamiento, el cual desde aquella fecha y sin interrupcion, viene administrando de hecho y de derecho tales intereses: el Alcalde acompañaba una certificación, de la cual resulta que la Direccion de general Obras públicas había acordado, entre otros particulares, que se hiciera entender al llamado Sindicato y al Ayuntamiento de Belchite que las Ordenanzas aprobadas en 1869 por el Gobernador de Zaragoza, con notoria infraccion de lo prescrito en la ley de 3 de Agosto de 1866 eran nulas, y no podian continuar rigiendo en manera alguna, y que se preguntara á los Municipios de Belchite y Almonacid si estaban dispuestos á formar una sola comunidad, y por consiguiente, un Sindicato, para la cual debería señalarse un plazo oportuno, caso de que contestaran afirmativamente, para redactar el proyecto y reglamento en términos legales, y si los pueblos no llegaban á un acuerdo sobre el particular, deberían pensar en la creacion de dos Sindicatos independientes, si no preferían vivir fuera del régimen verdaderamente legal y conveniente para sus propios intereses: asimismo resulta de la certificación de que viene tratándose, que el Presidente del Sindicato de riegos de Belchite había dirigido una comunicacion al Alcalde, manifestándole que en virtud de la orden de la Direccion general de Obras públicas, declarando nulas las Ordenanzas del Sindicato, éste se conceptuaba imposibilitado de continuar funcionando, en razon á que sus resoluciones carecerían de fuerza para ser obedecidas, y al mismo tiempo serian completamente ilegales, por lo cual hacía entrega al Ayuntamiento, tanto del gobierno y distribucion de las aguas, como de los fondos, documentos y demás perteneciente al Sindicato, dejando á disposicion del Alcalde el ramo de alfarda, para que el Ayuntamiento acordara lo que tuviera por conveniente, y dispusiera quién había de hacerse cargo de las cuentas y fondos correspondientes al mismo, y quién había de recibir documentos, archivos y utensilios pertenecientes á dicha alfarda:

Que el Gobernador, oída la Comision provincial, requirió de inhibicion al Juzgado, alegando: que no pueden admitirse interdictos contra las providencias de los Ayuntamientos y Alcaldes en asuntos de su competencia; citaba el Gobernador los artículos 89 de la ley Municipal, el 252 de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, y el 2.º y 5.º del Real decreto de 8 de Septiembre de 1887, manifestando que el requerimiento se dirigía á la Audiencia, caso de que no entendiera ya el Juzgado en el asunto:

Que la Sala de lo civil de la Audiencia de Zaragoza tramitó el incidente y sostuvo su jurisdiccion, fundándose: en que el asunto de que se trata es de la exclusiva competencia de los Tribunales ordinarios, porque el objeto del interdicto es que se reintegre á Don Eduardo Naval y se le mantenga en la posesion de los dos riegos extraordinarios para su finca en los dos meses de Junio y Julio de cada año, del que ha sido privado por el Ayuntamiento de Belchite; en que corresponde á los Tribunales ordinarios el conocimiento de las cuestiones relativas al dominio de las aguas públicas y al dominio y posesion de las

privadas, procediendo el interdicto cuando el particular es privado por el acuerdo de un Ayuntamiento de la posesion y aprovechamiento de las aguas; en que D. Eduardo Nadal se halla desde que adquirió su finca en quietud y pacífica posesion del derecho á los riegos extraordinarios, segun consta acreditado con certificación del Registro de la propiedad, de la cual se deduce que el Ayuntamiento no obró dentro del círculo de sus atribuciones al tomar el acuerdo que dió lugar al interdicto, porque la Corporacion municipal no está facultada para decidir cuestiones de propiedad y posesion de particulares ni para vulnerar legítimos derechos inscritos en el Registro de la propiedad, ni mucho menos para declarar la suficiencia ó insuficiencia de un título justificativo de posesion; en que no tienen aplicacion las disposiciones citadas por el Gobernador, porque éstas exigen como condicion indispensable que los acuerdos de los Ayuntamientos y de la Administracion hayan sido tomados en asuntos de su competencia, lo cual no sucede en el presente caso; la Sala, además de las disposiciones contenidas en el oficio de requerimiento, citaba el art. 254 de la ley de Aguas:

Que el Gobernador, oída la Comision provincial, insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites.

Visto el art. 226 de la ley de Aguas, segun el cual, la policía de las aguas públicas y sus cauces naturales, riberas y zonas de servidumbre, estará á cargo de la Administracion, y lo ejercerá el Ministerio de Fomento, dictando las disposiciones necesarias para el buen orden en el uso y aprovechamiento de aquéllas;

Visto el art. 252 de la propia ley, que prohíbe á los Tribunales de Justicia admitir interdictos contra las providencias dictadas por la Administracion dentro del círculo de sus atribuciones en materia de aguas, pudiendo los Tribunales conocer, á instancia de parte, en los casos de expropiacion forzosa prescritos en dicha ley, cuando no hubiera procedido al desahucio la correspondiente indemnizacion:

Visto el art. 254 de la ley que viene citándose, que atribuye á la competencia de los Tribunales que ejerzan la jurisdiccion civil el conocimiento de las cuestiones relativas al dominio de las aguas públicas y al dominio de las aguas privadas y de su posesion:

Visto el art. 89 de la ley Municipal, que dice que los Juzgados y Tribunales no admitirán interdictos contra las providencias administrativas de los Ayuntamientos y Alcaldes en los asuntos de su competencia, pudiendo los interesados utilizar para su derecho el recurso establecido en los artículos 171 y 177 de la misma ley:

Visto el art. 73 de la ley que acaba de citarse, que atribuye á la exclusiva competencia de los Ayuntamientos la policía urbana y rural, y la Administracion municipal, que comprende el aprovechamiento, cuidado y conservacion de todas las fincas, bienes y derechos pertenecientes al Municipio:

Considerando:

1.º Que el interdicto cuya interposicion ha dado lugar á la presente competencia tiene por objeto que se reintegre á D. Eduardo Naval en la posesion del derecho de que se cree asistido para aprovechar los dos riegos de que se ha hecho referencia, con las aguas de uso comun de la acequia del pueblo de Belchite:

2.º Que el régimen y administracion de dichas aguas está á cargo del Ayuntamiento del expresado pueblo, al que corresponde asimismo hacer

uso de las facultades que la ley Municipal y la de Aguas le confieren en los artículos anteriormente citados:

3.º Que en tal concepto, los acuerdos que adopte la Corporacion municipal en la materia de que se trata no pueden ser impugnados por la via del interdicto, sin perjuicio de los recursos que el interesado pueda utilizar para hacer valer el derecho de que se cree asistido en la forma correspondiente:

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Administracion.

Dado en San Sebastian á dos de Agosto de mil ochocientos noventa y dos.—Maria Cristina.—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas del Castillo.

(G. núm. 225.)

En el expediente y autos de competencia suscitada entre el Gobernador civil de la provincia de Soria y el Juez de primera instancia de aquella capital, de los cuales resulta:

Que con fecha 28 de Diciembre de 1891 el Procurador don Laureano Herrilla, en nombre de don Pascual Ramon Frauca, representante de su legítima mujer doña Josefa Blasco, dedujo ante el Juzgado de primera instancia de la mencionada ciudad demanda de interdicto de recobrar contra el concesionario del ferrocarril de Torralba á Soria, exponiendo los siguientes hechos:

1.º Que la mujer de su representado doña Josefa Blasco, recibió por herencia de su madre, cuatro décimas partes de una huerta, sita en termino de la dicha ciudad de Soria, conocida con el nombre de la Lazarilla Alta, posesion en la que venian quieta y pacíficamente desde el día del fallecimiento de la causante su representado y consorte, habiendo inscrito el título de propiedad en el Registro el día 22 de Junio de 1889, después de satisfechos los derechos reales de la Hacienda:

2.º Que la huerta de Lazarilla Alta tiene en su favor, desde tiempo inmemorial, una servidumbre de aguas que, tomándolas del río Gormayo, conduce una acequia convenientemente limpia y encespedada hasta la finca nombrada para los riegos necesarios en la misma.

3.º Que para la toma de aguas de esta acequia existia una presa construída con madera y piedra, que venia á cortar la corriente del río Gormayo, en sitio próximo á la huerta:

4.º Que comenzados los trabajos para la construccion del ferrocarril de que se ha hecho mencion, y cuando se empezó el puente, aun no terminado, por el que ha de cruzar la vía el río Gormayo, los constructores, sin consentimiento ni conocimiento siquiera de su representado, variaron por completo el cauce de la acequia, substituyéndola por otro de malísimas condiciones de nivelacion y falta de encespedado, en vez del cual tiene socaminas por la que se pierde el agua, caso que alguna condujera para beneficiar la huerta de la Lazarilla:

Que no contentos con esto los encargados de construir el referido puente, destruyeron casi en absoluto la antigua presa de la que se hacia relacion en el hecho anterior, despojando á su poderante de un derecho que tenía adquirido en favor de su finca no solo por el transcurso del tiempo, sino por anteriores concordias:

Que á virtud de tales hechos, después de aducir fundamentos legales, que estimó pertinentes, terminaba el Procurador su escrito, suplicando al Juzgado se sirviese admitir la demanda, y dándole el curso procedente en

derecho, declarar en su día la restitution del derecho vulnerado, obligando á la parte demandada á repouer las cosas al estado en que antes se encontraban, con abono de los daños originados y expresa condena de las costas:

Que admitida por el Juzgado la informacion testifical ofrecida por el actor, y convocadas las partes á juicio verbal, el Gobernador de la provincia, accediendo á lo solicitado por el representante de la Compania concesionaria del ferrocarril susodicho, y de acuerdo con el informe de la Comision provincial, requirió de inhibicion al Juzgado, fundándose en que, segun se deducia del escrito de demanda, las aguas de que se trataba tenían el carácter de públicas, y la cuestion que se ventilaba se referia, no al dominio de aquéllas si no á la posesion de las mismas, no habiéndose cometido el despojo denunciado, toda vez que el mismo demandante confesaba existian las aguas á que decía tener derecho, así como la acequia que las conducia, habiéndose variado, si acaso, únicamente el curso de las primeras y la condicion de la segunda, con perjuicio quizá del aprovechamiento que el interesado afirmaba disfrutar de tiempo inmemorial; en que el abuso que en ese caso entrañaría la alteracion introducida en el curso del rio por consecuencia de los desperfectos causados en la presa; y en las condiciones de la acequia ó canal debía ser corregido si existia por la Autoridad gubernativa, á la que correspondía mantener la posesion de las aguas públicas, sin perjuicio del derecho de propiedad, que no se discutia, impidiendo todo acto que tendiera á alterar el régimen y policía establecidos en el disfrute de aquéllas, con arreglo á lo dispuesto en los artículos de la ley de Aguas vigente 147, 185, 187 y 267; se citaba además por el Gobernador el Real decreto de 30 de Enero de 1884, y el art. 2.º del 8 de Septiembre de 1887:

Que sustanciado el incidente, el Juez sostuvo su jurisdiccion alegando, que si bien á los Tribunales contencioso administrativos corresponde conocer de todos los recursos que puedan entablarse contra las providencias dictadas por la Administracion en materia de aguas, esto es sin perjuicio de los derechos que, con anterioridad á la publicacion de las leyes sobre la materia tuvieran adquiridos los propietarios, pues en este caso, dichas aguas debían ser tenidas como de dominio privado, y las cuestiones que se suscitaren de la competencia de los Tribunales de justicia, á tenor de lo dispuesto en los artículos 247 y 254 de la mencionada ley, y máxime cuando aquéllas se fundaban en un título de derecho civil, cual es la posesion continuada desde tiempo inmemorial; y bajo este supuesto no tenían explicacion alguna los preceptos invocados por el Gobernador en su oficio, porque todas ellas se referian al caso en que la Administracion hubiera sido la que á la parte interdictante hubiese otorgado ó concedido aquel derecho á disfrutar el agua, lo cual no ocurría en el caso de autos, y lo que es más, aun cuando los actos ejecutados por la Empresa procedieren de una providencia administrativa, así y todo aparecería infringido el art. 252 de la expresada ley de Aguas que, segun se desprendia de la inspeccion ocular practicada por el Juzgado al sustanciar el incidente y se determinaba en el plano que acompañaba á los autos de una manera clara y terminante, la segunda pile del puente del ferrocarril se hallaba construída y edificada sobre terreno privativo del demandante, y así lo confesaron las partes en aquel acto, razon por la cual, aun prescindiendo del derecho al riego, siempre resultaría que el citado demandante había sido expropiado sin los requisitos exigidos por la ley de Expropiacion

forzosa, hecho que por sí solo hacía que la cuestión cayese fuera de los límites en que el Ministerio fiscal la había planteado, toda vez que nadie puede ser privado de su propiedad sin las circunstancias que la ley preceptúa, pudiendo el que lo fuere, con arreglo á la misma, utilizar el oportuno interdicto, que aun cuando, lo que afectaba á la presa construida sobre el río Gormiyo pudiera tenerse como comprendida dentro de las prescripciones de la ley de Aguas repetida, esto no obsta para que apareciese que no había precedido concesión administrativa, ni á la parte demandante ni á la Empresa ferroviaria para los trabajos, y aun así y todo, no se habían llenado los requisitos de la ley de Expropiación, y por esto y por los perjuicios causados, era así mismo procedente el interdicto; y finalmente, que no era aplicable al presente la sentencia invocada por el Ministerio fiscal por no tratarse de casos iguales, y si era de aplicación la doctrina contenida en el Real decreto de 3 de Diciembre de 1891, sancionada por otras disposiciones de la misma índole:

Que el Gobernador, de acuerdo con el dictamen de la Comisión provincial insistió en su requerimiento, resultando de lo expuesto el presente conflicto, que ha seguido sus trámites.

Visto el art. 255 de la ley de Aguas de 13 de Junio de 1879, según el cual, corresponde también á los Tribunales de justicia el conocimiento de las cuestiones suscitadas entre particulares sobre preferencia de derecho de aprovechamiento, según la presente ley:

1.º De las aguas pluviales.

2.º De las demás aguas fuera de sus cauces naturales, cuando la preferencia se funde en títulos de derecho civil;

Visto el art. 4.º de la ley de 10 de Enero de 1879, con arreglo al cual «Todo el que sea privado de su propiedad sin que se hayan llenado los requisitos expresados en el artículo anterior, podrá utilizar los interdictos de retener y recobrar, para que los Jueces amparen y en su caso reintegren en la posesión al indebidamente expropiado»

Considerando;

1.º Que la presente contienda de competencia se ha suscitado con motivo del interdicto interpuesto por don Pascual Ramon Frauca, como representante de su legítima mujer, contra la Empresa concesionaria del ferrocarril de Torralba á Soria;

2.º Que del expediente y autos aparece comprobado que la referida Empresa, de una parte ha invadido la propiedad particular del actor, sin que conste que se hayan llenado los requisitos exigidos por la ley de Expropiación forzosa vigente; y de otra, ha interrumpido á aquel en el disfrute de un aprovechamiento de aguas, con el desvío de la acequia que las conducía á la huerta titulada La Lazarilla, hecho llevado á cabo por la Compañía ferroviaria, sin conocimiento ni consentimiento de aquel;

3.º Que bajo cualquiera de los indicados aspectos que la cuestión se examine, es evidente que su conocimiento compete á la jurisdicción ordinaria, con arreglo á los artículos citados de la ley de Expropiación forzosa y de la de Aguas, toda vez que por lo que hace al primero no puede estar más justificada la procedencia del interdicto, y por lo que al segundo se refiere, tratase únicamente de la reclamación que un particular hace por actos ejecutados por otro particular; y en tal concepto, ejercitándose por el demandante derechos civiles, y no ventilándose la manera de llevar á efecto una concesión administrativa, que en el presente caso no existe, no son competentes para entender en el asunto las Autoridades administrativas;

Conformándose con lo consultado por el Consejo de Estado en pleno;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en decidir esta competencia á favor de la Autoridad judicial.

Dado en San Sebastian á dos de Agosto de mil ochocientos noventa y dos.—*Maria Cristina*—El Presidente del Consejo de Ministros, Antonio Cánovas de Castillo.

(G. núm. 223.)

MINISTERIO DE ULTRAMAR

REAL DECRETO

Vista la exposición elevada por la Sala segunda del Tribunal Supremo proponiendo, con sujeción á lo prevenido en el art. 2.º del Código penal, que la pena de seis años y un día de prisión mayor impuesta á José Corbella por el delito de homicidio se commute por la de seis meses de destierro de la villa de Colon:

Considerando que el reo de que se trata, al dar muerte al seductor de su hija, sorprendido casi infraganti, y después de haberse negado á casarse con ella, obró impulsado por estímulos tan poderosos que le produjeron arrebatos y obcecación, resultando de la rigurosa aplicación de las disposiciones del Código en el presente caso la pena excesiva, dadas las circunstancias que concurrieron en la comisión del delito:

Visto lo prevenido en la ley provisional de 18 de Junio de 1870, que reguló el ejercicio de la gracia de indulto, aplicada á las provincias de Ultramar por el Real decreto de 12 de Agosto de 1887;

Y de acuerdo con lo propuesto por la Sala sancionadora; lo consultado por la Sección de Hacienda y Ultramar del Consejo de Estado, y con el parecer de Mi Consejo de Ministros;

En nombre de Mi Augusto Hijo el Rey D. Alfonso XIII, y como Reina Regente del Reino,

Vengo en commutar la pena de seis años y un día de prisión mayor impuesta á José Corbella por la de seis meses de destierro á la distancia de 25 kilómetros del punto donde cometió el delito

Dado en San Sebastian á treinta y uno de Julio de mil ochocientos noventa y dos.—*Maria Cristina*.—El Ministro de Ultramar, Francisco Romero y Robledo.

(G. núm. 222.)

ANUNCIOS OFICIALES

COMISARIA DE GUERRA DE ORENSE

Intervención de Subsistencias

El Comisario de Guerra, Interventor de Subsistencias de esta plaza.

Hace saber: Que no habiendo producido resultado la primera subasta celebrada en el día de hoy, para asegurar el suministro de pan y pienso necesario á las tropas y ganado del Ejército y Guardia civil, estantes y transeúntes por esta plaza, durante el próximo año agrícola de 1892-93, cuyo anuncio fué inserto en el *Boletín oficial* de la provincia número 6, correspondiente al día 7 de Julio último; se celebrará la segunda subasta en esta Comisaría de Guerra, sita en la Plazuela del Corregidor número 24 piso segundo á las doce de la mañana, del día en que se cumplan los treinta de publicado el presente en el *Boletín oficial* de la provincia, ambas fechas inclusive, teniendo lugar el acto al día siguiente, si el término del plazo recayere en día feriado, y bajo las mismas reglas y condiciones que han reído en la prime-

ra, cuyos pliegos se hallan de manifiesto en esta oficina, todos los días hábiles á las horas de despacho; así como los precios límites que se publicarán oportunamente, si la superioridad creyere conveniente modificar los que se insertaron en el *Boletín* del día 3 del actual.

Los artículos que se subastan según cálculo, son:

Raciones de pan	66 000
Idem de cebada	2 000
Quintales métricos de paja	140

Las proposiciones deberán presentarse en pliego cerrado y extendidas en papel sellado, de la clase 11.ª, sin abreviaturas ni enmiendas ni raspaduras, (que no son admisibles aunque esten salvadas) y con arreglo al modelo inserto á continuación del anuncio de la primera subasta, publicada en el *Boletín* antes mencionado, con la rectificación inserta en el del día trece siguiente.

Lo que se hace público, para conocimiento de las personas, que deseen interesarse en la licitación.

Orense 13 de Agosto de 1892.—*Enrique Thus*.

ADMINISTRACION

DE CONTRIBUCIONES DE LA PROVINCIA DE ORENSE

Don Manuel Montes, Recaudador de contribuciones de territorial é industrial de la zona de Bande.

Hago público: que la recaudación correspondiente al primer trimestre de 1892-93 tendrá lugar los días 17, 18, 19, 20 y 21 del mes actual de los Ayuntamientos de Bande, Muñíos y Padrenda.

Asimismo se hace saber que transcurridos que sean dichos días podrán los contribuyentes satisfacer sus cuotas sin recargo durante los diez primeros días del mes de Septiembre próximo en la cabeza de la zona.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 33 de la Instrucción vigente de recaudación de 12 de Mayo de 1888.

Bande 15 de Agosto de 1892.—*Manuel Montes*.

ADMINISTRACION

DE IMPUESTOS Y PROPIEDADES DE LA PROVINCIA DE ORENSE

MASIDE

Por término de ocho días, á contar desde el en que el presente anuncio aparezca inserto en el *Boletín oficial*, permanecerá expuesto al público en la Secretaría de este Ayuntamiento el reparto individual del impuesto de consumos, confeccionado para el presente ejercicio.

Maside Agosto 16 de 1892.—El Alcalde Presidente, Javier Morenza.

AYUNTAMIENTOS

VEREA

Terminado por la Junta repartidora el reparto de consumos y sus recargos para el corriente ejercicio de 1892 á 93, se halla de manifiesto en la Secretaría de este Ayuntamiento por término de ocho días durante los cuales todos los contribuyentes pueden enterarse de sus respectivas clases, unidades, número de personas y cuotas que se le impusieron y producir las reclamaciones conducentes; pasado que sea aquel término no serán admitidas.

Lo que además de las citaciones personales se anuncia al público para que no puedan alegar ignorancia.

Verea Agosto 16 de 1892.—El Alcalde presidente, Manuel Arias.

ANUNCIOS IMPRESOS

PARA

ELECCIONES

AYUNTAMIENTOS

Cédula propuesta de candidato.

Sobre para la misma.

Oficio solicitando la declaración de candidato como ex-Diputado provincial.

Idem idem por haber luchado en anterior elección.

Lista propuesta de Interventores y suplentes por los candidatos proclamados.

Oficio excusando el cargo de Interventor ó suplente.

Otro citando á los Interventores ó suplentes que no se presentan á tomar posesión.

Bando anunciando los locales en que se han de constituir las Mesas.

Comunicación á la Junta provincial participando la designación de locales.

Lista numerada para la duplicada de votación.

Pliego plantilla para anotar el recuento de votos en el acto del escrutinio.

Certificación del resultado del escrutinio para exponer al público y remitir á la Junta provincial y al Gobernador.

Idem para entregar á los candidatos que la reclamen.

Oficio remitiendo á la Junta provincial y al Gobernador certificación del resultado del escrutinio.

Sobre para el oficio anterior.

Recibo de la Administración ó Estafeta de Correos.

Acta de votación en las secciones.

Copia literal del acta anterior para remitir al Gobernador y Presidentes de las Juntas provincial y municipal de la cabeza del distrito y para entregar al Interventor designado para asistir al escrutinio general y á los candidatos que la pidan.

Sobre para la remisión de la copia anterior.

Recibo de la Administración ó Estafeta de Correos.

Credencial para el Interventor designado para asistir al escrutinio general.

Oficio remitiendo el acta original al Presidente de la Junta municipal del término en que se hace la votación.

Expediente general para la elección: carpeta y diligenciado

CABEZAS DE DISTRITO

Edicto convocando á segunda sesión de escrutinio general.

Oficio al Gobernador de no haberse podido celebrar en primera convocatoria el escrutinio general.

Pliego-plantilla para el recuento de votos en el escrutinio general.

Acta para la triplicada del escrutinio general.

Oficio remitiendo el acta anterior al Gobernador y Juntas provincial y municipal de la cabeza del distrito.

Certificación parcial para los candidatos.

Oficio de remisión de la certificación anterior.

FIJARSE BIEN

Para aprender industria sin dificultad y de productos positivos sin apenas hacer desembolsos, dirigirse con sello para mas detalles á Saiz é hijos, Irún, provincia de Guipúzcoa.

Imprenta LA POPULAR